

COMUNICADO DE LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES (UPF)

La Justicia no puede reformarse a medias

Sin una Fiscalía reforzada, la atribución de la investigación penal es una promesa vacía.

La Unión Progresista de Fiscales ha recibido con atención el anuncio realizado por el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes relativo a la creación de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados para el año 2026, lo que supondría un incremento aproximado del 8,5 % de la planta judicial.

Desde la UPF reconocemos que se trata de una medida necesaria para afrontar los retos derivados del aumento de la litigiosidad, del crecimiento poblacional y de la entrada en vigor de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, no podemos ocultar nuestra profunda tristeza, decepción y preocupación por el enfoque del anuncio y por lo que deliberadamente ha quedado fuera del mismo.

La reforma de la Justicia no puede presentarse ante la opinión pública como una cuestión que se resuelve exclusivamente mediante el incremento de plazas en la carrera judicial. La Administración de Justicia no funciona por compartimentos estancos. Jueces y fiscales vertebran conjuntamente el sistema y cualquier modificación estructural que afecte a uno de sus pilares impacta de forma directa e inmediata sobre el otro.

La carrera fiscal no es un actor accesorio del sistema, sino un elemento central en la tutela de los derechos fundamentales, en la persecución del delito, en la protección de las víctimas y en el funcionamiento ordinario de múltiples jurisdicciones. La Justicia penal, la de menores, la de violencia sobre la mujer, la civil con intervención preceptiva del Ministerio Fiscal, la protección de personas con discapacidad, las conformidades o la ejecución penal dependen de manera directa de la actuación fiscal. Incrementar de forma significativa la capacidad jurisdiccional sin reforzar paralelamente el Ministerio Fiscal genera un desequilibrio estructural que compromete la eficacia real del servicio público.

Este desequilibrio resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta el contexto en el que se produce el anuncio. El propio Gobierno ha reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de acometer una de las reformas más profundas del proceso penal español: la atribución al Ministerio Fiscal de la dirección de la investigación penal. Una transformación de esta envergadura no puede abordarse sin una planificación previa, ambiciosa y responsable de los medios personales y materiales necesarios para hacerla viable.

No es razonable anunciar nuevas responsabilidades estructurales para la Fiscalía —que implican un incremento sustancial de carga de trabajo, especialización y dedicación— sin garantizar previamente que la carrera fiscal contará con los efectivos suficientes para asumirlas con plenas garantías. Reformar la Justicia sin reforzar la Fiscalía no es modernizar el sistema: es trasladar el riesgo de colapso al eslabón que ya soporta una presión extrema.

La situación actual de la plantilla fiscal evidencia un déficit estructural sostenido en el tiempo. En los últimos años, los incrementos de plazas han sido irregulares y claramente insuficientes, limitándose en la práctica a mantener ratios que ya eran bajas en comparación con los estándares europeos. Al mismo tiempo, el Ministerio Fiscal afronta un escenario demográfico complejo, con un porcentaje significativo de fiscales próximos a la jubilación y sin un plan de reposición y crecimiento neto que permita garantizar la continuidad, la experiencia y la especialización del servicio.

A ello se suma una realidad que no puede seguir normalizándose: el uso estructural de la expectativa de destino como solución a la falta de plazas orgánicas. Esta situación genera precariedad profesional y personal, dificulta la especialización y traslada a los nuevos fiscales el coste de una deficiente planificación de recursos humanos.

Desde la Unión Progresista de Fiscales queremos ser claros: apoyar el fortalecimiento de la Judicatura no es incompatible con exigir, al mismo tiempo, un refuerzo real y proporcional del Ministerio Fiscal. Al contrario, es la única forma de garantizar que las reformas anunciadas no se queden en una declaración política sin traducción efectiva en la realidad diaria de los juzgados y fiscalías.

La modernización de la Justicia exige una visión integral, coherente y equilibrada. No hay juez eficaz sin una Fiscalía dotada, presente y operativa. No hay investigación penal dirigida por fiscales sin medios humanos suficientes. Y no hay servicio público de calidad cuando una de sus columnas esenciales es sistemáticamente invisibilizada en los grandes anuncios de reforma.

La UPF seguirá defendiendo, con rigor y lealtad institucional, un modelo de Justicia que no se construya a base de parches ni de desequilibrios, sino sobre la base de una planificación seria, valiente y respetuosa con todos los operadores jurídicos. La credibilidad de la reforma y la confianza de la ciudadanía dependen de ello.

Bilbao, Olot, Córdoba, Jaén, Granada y Barcelona, a 27 de enero de 2026

El Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales